



RESOLUCIÓN No. CSJBOR20-261
10 de septiembre de 2020

“Por medio de la cual se decide una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa No.: 13001-11-01-001-2020-00153-00

Solicitante: Mabel Juliana Chinchillá Guerrero

Despacho: Juzgado 1° Civil del Circuito de San Andrés

Funcionario judicial: Julián Garcés Giraldo

Clase de proceso: Acción de tutela

Número de radicación del proceso: 2020-00026-00

Magistrada ponente: Patricia Rocío Ceballos Rodríguez

Fecha de sesión: 9 de septiembre de 2020

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de vigilancia judicial administrativa

El Coordinador de la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante oficio DEAJIFO20-1115 del 8 de agosto de 2020, remitió por competencia la solicitud de vigilancia judicial administrativa presentada por la doctora Mabel Juliana Chinchillá Guerrero, dentro de la acción de tutela que cursa ante el Juzgado 1° Civil del Circuito de San Andrés, debido a que el día 23 de abril de 2020 ese despacho judicial profirió el fallo No. 029-2020, contra el cual se presentó impugnación, sin que se haya surtido el envío del expediente al Tribunal Superior de San Andrés.

2. Tramite de la vigilancia judicial administrativa

Mediante auto CSJBOAVJ20-180 del 14 de agosto de 2020, se dispuso requerir al doctor al doctor Julián Garcés Giraldo, Juez 1° Civil del Circuito de San Andrés, como al secretario de esa agencia judicial, para que suministraran información detallada de la acción de tutela con radicación 2020-00026-00, otorgando para ello el término de tres (3) días contados a partir de su comunicación, diligencia efectuada a través de mensaje de datos el día 19 de agosto de la presente anualidad.

3. Informes de verificación

En cumplimiento de lo anterior, mediante escrito radicado el 20 de agosto de 2020, la doctora Kelly Rodríguez Sarmiento, secretaria del Juzgado 1° Civil del Circuito de San Andrés, allegó documentos contentivos de las diferentes actuaciones surtidas al interior del de la acción de tutela de marras, dentro de las que se destacan el fallo de primera instancia, la concesión de la impugnación y el fallo de segunda instancia, sin embargo no se acompañó el informe solicitado, por lo que el despacho ponente encontró mérito para disponer la apertura del trámite administrativo mediante auto CSJBOAVJ20-204 del 26 de agosto de 2020, ordenando a los servidores judiciales encartados rendir las explicaciones justificaciones, informes, documentos y pruebas que pretendieran hacer valer, respecto de las alegaciones promovidas por la quejosa, otorgando para tales efectos el término de 3 días contados a partir del día siguiente a la comunicación de ese auto, diligencia efectuada el día 3 de septiembre hogaño.

4. Solicitud de explicaciones.

En atención a la apertura del trámite administrativo, tanto el doctor Julián Garcés Giraldo, Juez 1° Civil del Circuito de San Andrés, como la doctora Kelly Rodríguez Sarmiento, secretaria de esa agencia judicial, rindieron las explicaciones el día 3 de septiembre de 2020, afirmando en síntesis que, el día 3 de abril fue notificado el auto de 31 de marzo de 2020 dictado por el Tribunal Superior de San Andrés, en el cual se ordenó asumir el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, por encontrar infundado el impedimento formulado por el despacho judicial. Adujeron que, el día 13 de abril de 2020 se procedió a dictar auto admisorio y a correr traslado del escrito tutelar a los accionados entre el 14 y el 17 de abril de la presente calenda.

Seguidamente, el día 20 de abril de 2020 se dictó fallo de primera instancia y se realizó la notificación de ese proveído en fecha 24 del mismo mes y año, decisión impugnada por la accionante el día 29 de abril hogaño.

Depusieron los servidores judiciales, que la impugnación fue concedida mediante auto de 11 de mayo de 2020, remitiéndose el expediente al superior el día 15 de mayo, debido a que desde la fecha de concesión de la alzada se intentó generar el reparto a través del TYBA, sin la cual el Tribunal no recibía el proceso, situación informada a la quejosa el día 14 de mayo. Afirmaron que, el día 23 de junio del corriente año se notificó fallo de segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por la doctora Mabel Juliana Chinchillá Guerrero, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la petición se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

2. Problema administrativo

Conforme a los hechos en que se funda la solicitud y lo informado por el funcionario requerido, corresponde a ésta Corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el decurso del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que involucren un desempeño contrario a la administración oportunidad y eficaz de justicia.

En caso de estimarse lo anterior, atendiendo a que la solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsa de copias a la jurisdicción disciplinaria contra el servicio judicial determinado.

Para resolver la cuestión planteada, se deberá abordar los temas relacionados a continuación.

3. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe “*para que la justicia se administre oportuna y eficazmente*” y que “*es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias*”, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i) cuestiones de incumplimiento de términos actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; ii) si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y iii) si existe una actuación en forma negligente o si por el contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.*

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: “*Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones*”. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma cómo un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la sala disciplinaria seccional.

4. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8°, prevé dentro de las garantías procesales, el derecho de toda persona “*a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (...)*”.

Por su parte, la Constitución Política en sus artículos 29 y 229 consagran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, respectivamente, lo cuales comprenden las prerrogativas que se enuncian a continuación: *i) el derecho que tiene toda persona de poner en funcionamiento el aparato judicial, ii) el derecho a obtener una respuesta oportuna, y iii) el derecho a que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.*

La anterior consagración implica el deber de todas las autoridades públicas de observar de manera diligente los términos y adelantar de manera oportuna los trámites judiciales de que conoce, en tanto su inobservancia y la dilación injustificada “*(...) pueden conllevar la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración en general, y a la administración de justicia en particular*”¹, amén de resultar lejana la efectividad de una justicia material en el caso concreto.

¹ T-297-06.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado también que *“el incumplimiento de los plazos judiciales tiene un carácter excepcional, pues la regla general, contenida en el artículo 228 superior, es la obligatoriedad de los términos procesales”*², en ese sentido, se admite en casos excepcionales que el incumplimiento de los términos procesales no le es directamente atribuible al funcionario judicial en tanto *“la mora, la congestión y el atraso judiciales son algunos de los fenómenos que afectan de manera estructural la administración de justicia en Colombia”*³.

En ese orden, con relación a la mora judicial, mediante sentencia T-052 de 2018, la Corte Constitucional precisó:

“La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

(...)

Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho, se encuentra incluida la solución célere de los asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de justicia (...).

Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada: “(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial”.

(...)

En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: “(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”.

También respecto a este asunto, el Consejo de Estado⁴ ha expresado: *“(...) no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que esta debe ser injustificada, debe estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial”.*

Quiere decir lo anterior, que para determinar si se está o no frente a una dilación justificada es necesario realizar un análisis valorativo y la comprobación de las circunstancias en el caso concreto, *“juicio ciertamente complejo en el que “deben tomarse en consideración las*

² T-190-95, T-1068-04, T-803-12 entre otras.

³ T-741-15.

⁴ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia. Sentencia del 23 de enero de 2014. Radicado 11001-03-15-000-2013-02547-00(AC).

*circunstancias particulares del despacho que adelanta la actuación y del trámite mismo, entre las que se cuentan: i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, iii) la complejidad del caso sometido a su conocimiento y iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal*⁵.

Por tanto, la omisión o dilación en el cumplimiento de los términos procesales en cuanto su relevancia constitucional está ligada a la relación intrínseca entre la carga funcional y el cumplimiento de los deberes a su cargo.

En conclusión, puede afirmarse válidamente que, de conformidad con la jurisprudencia sentada por estas corporaciones, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, y, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debido a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos.

A su turno, cuando se presenta un incumplimiento de los términos procesales, la prosperidad de las causales eximentes de sanción administrativa corresponde examinarlas en cada caso concreto. El incumplimiento de los términos se entiende justificado *“(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constatan problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución del caso en el plazo previsto en la ley”*⁶.

Lo descrito en precedencia, fue tenido en cuenta en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, cuando en el artículo 7º dijo:

“(…) la respectiva Sala Administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura, decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate.

Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas.”

Implica lo anterior, que en el trámite de una vigilancia judicial administrativa cada caso concreto debe analizarse de manera particular y observarse las circunstancias propias del despacho vigilado así como la gestión del servidor judicial, entre esos aspectos, la carga efectiva, los ingresos efectivos y la productividad entre otros, que permitan concluir, en el evento de no acatarse el término perentorio e improrrogable, la existencia de razones no sólo que la expliquen sino que la justifiquen, pues no es admisible que frente a circunstancias objetivas de dificultad en la gestión judicial se exija el cumplimiento inexorable de los términos, pues si bien su incumplimiento es sancionable, tal hecho “se

⁵ T-1249-04.

⁶ Cfr. Sentencia T-803 de 2012.

*exculpa cuando se presenta una causa extraña o cuando se desborda la capacidad física del funcionario con la cantidad de trabajo que le corresponde en ese determinado momento (...)*⁷.

5. Plazo razonable como elemento fundamental para determinar la configuración de mora judicial

Aunado a lo expuesto en el acápite anterior, es fundamental ahondar sobre lo que debe entenderse por plazo razonable en la resolución de los procesos judiciales, como quiera que éste constituye un elemento determinante para establecer la configuración o no de la mora judicial en un caso específico.

En ese orden, el plazo razonable, es concebido como una forma de garantizar que la duración de los procesos y actuaciones judiciales no conlleven a una vulneración de derechos de quienes acceden a la administración de justicia.

Sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia SU-394 de 2016, se apoyó en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que establece⁸: *“Respecto a la garantía del plazo razonable la Corte ha establecido que es necesario tomar en consideración cuatro elementos a fin de determinar su razonabilidad: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales⁹ y d) los efectos que la demora en el proceso puedan tener sobre la situación jurídica de la víctima¹⁰”*.

A su turno, el Consejo de Estado ha señalado: *“(...) para la determinación de qué se entiende por “violación o desconocimiento del plazo razonable” corresponde al juzgador analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como los factores internos y externos en los que se presta el servicio, en otros términos, con qué instrumentos o herramientas se contaba para adoptar la decisión y, por lo tanto, si no existen circunstancias que justifiquen el retardo en la definición del asunto administrativo o jurisdiccional”¹¹*.

6. Caso concreto

La doctora Mabel Juliana Chinchillá Guerrero, promovió solicitud de vigilancia judicial administrativa dentro de la acción de tutela que cursa ante el Juzgado 1° Civil del Circuito de San Andrés, debido a que el día 23 de abril de 2020 ese despacho judicial profirió el fallo No. 029-2020, contra el cual se presentó impugnación, sin que se haya surtido el envío del expediente al Tribunal Superior de San Andrés.

Mediante auto CSJBOAVJ20-180 del 14 de agosto de 2020, se dispuso requerir al doctor al doctor Julián Garcés Giraldo, Juez 1° Civil del Circuito de San Andrés, como al secretario de esa agencia judicial, para que suministraran información detallada de la acción de tutela con radicación 2020-00026-00, otorgando para ello el término de tres (3) días contados a partir de su comunicación, diligencia efectuada a través de mensaje de datos el día 19 de agosto de la presente anualidad.

⁷ T-346-12.

⁸ Caso Osorio Rivera y familiares vs Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. párr. 200, y Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de abril de 2012. Párr. 67.

⁹ Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, supra, párr. 77, y Caso Luna López Vs. Honduras, supra, párr. 189.

¹⁰ Caso Valle Jaramillo Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155, y Caso Luna López Vs. Honduras, supra, párr. 189.

¹¹ Ver sentencia 52001-23-31-000-2005-00551-01(39524), 29 de febrero de 2016.

En cumplimiento de lo anterior, mediante escrito radicado el 20 de agosto de 2020, la doctora Kelly Rodríguez Sarmiento, secretaria del Juzgado 1° Civil del Circuito de San Andrés, allegó documentos contentivos de las diferentes actuaciones surtidas al interior del de la acción de tutela de marras, dentro de las que se destacan el fallo de primera instancia, la concesión de la impugnación y el fallo de segunda instancia.

En atención a la apertura del trámite administrativo, tanto el doctor Julián Garcés Giraldo, Juez 1° Civil del Circuito de San Andrés, como la doctora Kelly Rodríguez Sarmiento, secretaria de esa agencia judicial, rindieron las explicaciones el día 3 de septiembre de 2020, afirmando en síntesis que, el día 3 de abril fue notificado el auto de 31 de marzo de 2020 dictado por el Tribunal Superior de San Andrés, en el cual se ordenó asumir el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, por encontrar infundado el impedimento formulado por el despacho judicial. Adujeron que, el día 13 de abril de 2020 se procedió a dictar auto admisorio y a correr traslado del escrito tutelar a los accionados entre el 14 y el 17 de abril de la presente calenda.

Seguidamente, el día 20 de abril de 2020 se dictó fallo de primera instancia y se realizó la notificación de ese proveído en fecha 24 del mismo mes y año, decisión impugnada por la accionante el día 29 de abril hogaoño.

Depusieron los servidores judiciales, que la impugnación fue concedida mediante auto de 11 de mayo de 2020, remitiéndose el expediente al superior el día 15 de mayo, debido a que desde la fecha de concesión de la alzada se intentó generar el reparto a través del TYBA, sin la cual el Tribunal no recibía el proceso, situación informada a la quejosa el día 14 de mayo. Afirmaron que, el día 23 de junio del corriente año se notificó fallo de segunda instancia.

De la solicitud de vigilancia judicial administrativa, de las explicaciones rendidas por los servidores judiciales y de las pruebas obrantes en el plenario, es posible extraer lo siguiente:

No.	Actuaciones	Fecha
1	Reparto de la acción de tutela	20/03/2020
2	Auto declara impedimento	24/03/2020
3	Auto emitido por el superior en que ordena reasumir el conocimiento de la acción	31/03/2020
4	Auto obedézcase y cúmplase lo dispuesto por el superior	13/04/2020
5	Fallo de primera instancia	23/04/2020
6	Impugnación del fallo	29/04/2020
7	Memorial de seguimiento del envío del expediente al superior	5/05/2020
8	Memorial de seguimiento del envío del expediente al superior	7/05/2020
9	Auto concede impugnación y ordena la remisión inmediata del expediente al Tribunal Superior	11/05/2020
10	Respuesta de la secretaría por medio de la cual se informó que por el deficiente servicio de internet, y errores en el funcionamiento del TYBA y de la página web de la Rama Judicial no había sido posible remitir el expediente al superior para surtir la impugnación	14/05/2020

11	Reparto y remisión del expediente al superior	15/05/2020
12	Fallo de segunda instancia	17/06/2020
13	Notificación fallo de segunda instancia	23/06/2020

Descendiendo al caso concreto se tiene que el objeto de la presente vigilancia judicial administrativa recae en la presunta mora en la que se encuentra incurso el Juzgado 1° Civil del Circuito de San Andrés, Islas, en remitir el expediente de tutela al superior para que se imparta el trámite a la impugnación presentada en contra del fallo de 23 de abril de 2020.

En ese sentido, se observa que la impugnación del fallo de tutela de 23 de abril de 2020 fue remitida al superior para su trámite el día 15 mayo de 2020, atendiendo a los problemas de conectividad que se presentaron desde el momento en que se concedió la alzada y la fecha del envío del expediente, pues según lo afirmado por lo servidores judiciales encartados, antes de dicha fecha no fue posible generar el acta de reparto en el Sistema Justicia XXI Web- TYBA, todo ello con anterioridad al requerimiento efectuado por el despacho ponente el día 19 de agosto de 2020, por lo que no se avizoran circunstancias constitutivas de mora actual.

Lo anterior, teniendo en cuenta que tal y como se sostuvo en líneas precedentes, el mecanismo de la vigilancia judicial administrativa se ciñe a determinar: *i)* cuestiones de incumplimiento de términos actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación en forma negligente o si por el contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

Ahora, entre el momento en que se concedió la impugnación y la fecha en que se efectuó el envío del expediente al superior transcurrieron 4 días, término que si bien no se ajusta en estricto sentido a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, a juicio de esta seccional se encuentra justificado atendiendo a que la demora obedeció a los problemas de conectividad a internet por los que atraviesa la Isla de San Andrés y que sin duda entorpecen la laborar judicial, teniendo en cuenta que el servicio de administración de justicia se presta en forma virtual y remota, por lo que contar con un servicio de internet optimo resulta indispensable para que los servidores judiciales cumplan cabalmente con las funciones a su cargo.

Así pues, no se evidencia una situación de deficiencia que deba ser normalizada a través de la vigilancia judicial administrativa, por lo que se dispondrá el archivo de la presente actuación.

7. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, esta seccional no avizora circunstancias constitutivas de mora actual, por lo que dispondrá el archivo de la presente actuación.

Resolución Hoja No. 9
Resolución No. CSJBOR20-261
10 de septiembre de 2020

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

3. RESUELVE

PRIMERO: Archivar la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por la doctora Mabel Juliana Chinchillá Guerrero, dentro de la acción de tutela con radicación 2020-00008-00 que cursa ante el Juzgado 1° Civil del Circuito de San Andrés, por las razones anotadas.

SEGUNDO: Comunicar la presente resolución a los involucrados en el trámite administrativo.

TERCERO: Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



IVÁN EDUARDO LATORRE GAMBOA
Presidente

M.P. PRCR/KYBS